

DESAPARECIDOS

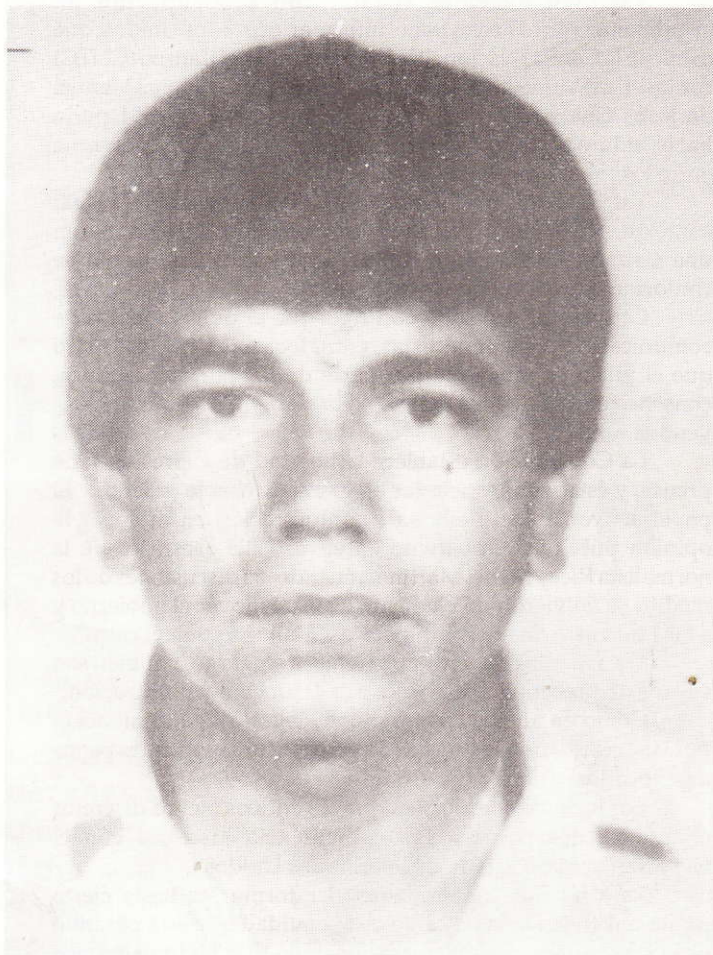
UNA PUBLICACION MENSUAL DEL COMITE DE FAMILIARES DE DETENIDOS - DESAPARECIDOS EN HONDURAS (COFADEH)

AÑO 2

No. 16

FEBRERO, 1992

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS



José Leonel Suazo Castillo

Se le considera el último desaparecido en Honduras desde que fue secuestrado el 2 de febrero de 1989 por hombres armados a bordo de una camioneta sin placas y con vidrios polarizados, cuando salía de su trabajo en el Registro Nacional de las Personas (RNP), en Tegucigalpa.

Para hacerle aparecer con vida, su madre Rosa Francisca Suazo, interpuso varios recursos de Exhibición Personal contra el comandante de la Fuerza de Seguridad Pública, coronel Lázaro Avila Soleno y otras autoridades militares, con resultados negativos.

Leonel Suazo Castillo dejó una esposa, dos niños, un trabajo y un partido. Era activista del Partido Nacional en el poder, en cuyas filas militó a favor de la actual alcaldesa de la capital, Nora Gúnera de Melgar. Pero su correligionaria nada hizo para su aparición...

EN PALMEROLA TIRAN A MATAR

Venía desde la ciudad de Santa Rita, Yoro, hacia la capital hondureña a bordo de su carro recién comprado, cuando justo a la entrada de la base militar norteamericana de Palmerola el vehículo le falló. Hizo un viraje brusco, y los guardianes hondureños de la base no titubearon en disparar sus armas, aparentemente al aire.

Cuando Ramón Everardo Benítez bajó del auto a dar las explicaciones respectivas de lo que pasaba, recibió un balazo en el pómulo izquierdo. No murió, pero quedó con su rostro y brazo izquierdo paralizados, su oído izquierdo perdido totalmente, con trastornos mentales, y a menudo pierde el conocimiento.

El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 1991 y estuvo silenciado hasta el 7 de febrero de este año, cuando Ramón tuvo fuerzas para hacer la denuncia. Vivió para ser víctima de la guerra que los gringos nos impusieron.

Con este hecho doloroso queda probado una vez más que Palmerola ha sido y es siempre una amenaza para los hondureños en pleno valle de Comayagua, donde no deben haber ni gringos ni sida ni muerte. Por patriotismo debemos exigir su retirada...!marines go home!

Los Derechos Humanos en Honduras, vistos por los Norteamericanos

El último monitoreo de la situación de los derechos humanos en Honduras hecho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue analizado aquí por distintos sectores sociales involucrados, quienes usaron desde elogios discretos hasta juicios condenatorios del mismo.

Según los analistas más discretos, el informe del departamento de Estado de 1991 no abusa del lenguaje ambiguo y estudiadamente encubridor, que caracterizó sus ediciones anteriores, con el fin deliberado de excusar la responsabilidad del gobierno y de sus Fuerzas Armadas.

Afirman que esta vez es más explícito en cuanto a su apreciación sobre la participación de los organismos de seguridad del Estado en atentados contra los derechos humanos.

También sostienen que es directo porque señala el desorden de la administración de la justicia en Honduras y la perniciosa aplicación del fuero de guerra en numerosos casos judiciales correspondientes al fuero común.

Dice el informe que "los principales problemas sobre derechos humanos en Honduras son muertes sin juicio previo, detenciones arbitrarias, con incomunicación, tortura y abusos contra los detenidos e impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas en la comisión de tales violaciones".

Agrega el documento que tal como ha sucedido en los años pasados, cuando miembros de las Fuerzas Armadas cometen actos de asesinato y tortura, los militares con frecuencia han tratado de proteger a los que han cometido tales violaciones.

Otro problema serio- insiste- es la debilidad e ineficiencia judicial. El sistema de justicia criminal es incapaz de proteger sistemáticamente los derechos de los ciudadanos comunes, lo cual se debe a la falla del gobierno para ejercitar el fuero judicial en debida forma que asegure los derechos humanos contra las violaciones, garantizar la independencia de los jueces y de las cortes, establecer un sistema transparente de justicia militar y sentar mecanismos que resuelvan los asuntos jurisdiccionales entre los sistemas de las cortes civiles y militares".

Un detalle que nos llama poderosamente la atención es que por primera vez el informe reconoce al COFADEH como una de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos más activas y conocidas.

La sola mención significa el reconocimiento y legitimación de los Estados Unidos a una causa perseguida y estigmatizada por los anticomunistas de oficio, que en vez de haber estado empleados en salvar vidas y hacer aparecer desaparecidos, promovían tales violaciones.

Sobre el tema de los desaparecidos, el informe asegura que no hay informes de desaparecidos por motivos políticos en 1991. "Los grupos locales que defienden los derechos humanos (COFADEH) continúan sus presiones sin éxito sobre un informe oficial de las aproximadamente 145 desapariciones de que se tiene noticia, las cuales ocurrieron principalmente en los comienzos de 1980 bajo el mando del desaparecido comandante general de las Fuerzas Armadas, Gustavo Alvarez Martínez".

A propósito, este Comité considera que los aprovechados de turno recogen tales juicios para repicar por todos los medios

que "en mi gobierno no hay desaparecidos", pero en cambio guardan silencio o complicidad el resto del tiempo ante las demás violaciones a los derechos humanos, como si éstos se agotaran en el atroz delito de desaparecer personas.

También debemos señalar con preocupación un argumento injusto hecho por el informe de Estados Unidos, que califica a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) como un "movimiento marxista", cuyo dirigente regional Manuel de Jesús Guerra asesinado el 11 de diciembre de 1991 pudo haber sido ejecutado "como resultado de una pugna interna entre los miembros de la CNTC".

Tal aseveración lució malintencionada en el actual contexto, por lo que los aludidos con todo derecho anunciaron una respuesta al Departamento de los Estados Unidos que se conformó con las versiones policiales.

Otro sector señalado con rigor fue el de los medios de comunicación y los periodistas, entre los cuales hay consenso que el juicio es ecuaníme por parte de los norteamericanos; consenso entre aquellos que no se prestan, ni se alquilan ni se venden.

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, y éstas son respetadas en gran parte en la práctica. "El papel activo de los medios de comunicación en moldear la opinión pública fue aparente en el caso del asesinato de la normalista Riccy Mabel Martínez, cuando las discusiones de los medios se volvieron un elemento clave al mover el gobierno y a las Fuerzas Armadas para perseguir la justicia en el caso."

"Los medios de comunicación, sin embargo, también son sujetos de preocupantes niveles de corrupción y politización.

Como en años recientes, hubo alegatos de intimidación por las autoridades, instancias de autocensura, y grandes pagos a periodistas".

Por lo dicho anteriormente, a los críticos menos discretos el informe les pareció una coincidencia histórica con el Departamento de Estado de los Estados Unidos".

Para las Fuerzas Armadas el informe "es hasta cierto punto objetivo, habla bastante de la realidad que está pasando en el país, aunque también creemos que toca algunos puntos que son sumamente importantes, de una manera bastante subjetiva y no reconoce nuestros esfuerzos respecto a los derechos humanos".

Para la Corte Suprema de Justicia "algunos aspectos del informe son correctos, otros habrá que aclararlos. Nuestro empeño es mejorar cada vez más la responsabilidad que tenemos en impartir justicia correctamente".

Para el COFADEH no puede haber coincidencia histórica con el informe norteamericano, como algunos piensan, porque el mismo sólo es el vehículo de una política que gira según los intereses mezquinos del coloso del Norte en la región centroamericana, a la que ayer tiñó de sangre, hoy le soba sus heridas y mañana utiliza de cloaca o de campo de batalla.

De todos modos, siempre es interesante saber cómo la cancillería norteamericana ve la situación de los derechos humanos en Honduras.....

TODAVIA HAY PRESOS POLITICOS EN HONDURAS

José Arnulfo Beltrán, salvadoreño de nacionalidad, acusado en Honduras por terrorismo y tráfico de armas en favor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), guarda prisión en el Centro Penal de Choluteca.

Beltrán fue apresado por agentes de Migración y de la Fuerza de Seguridad Pública el 11 de noviembre de 1991, en la aduana El Quasaule frontera con Nicaragua.

Según denuncia de sus familiares, durante el cautiverio el detenido fue sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, para no variar la costumbre represiva a la que está acostumbrado el aparato de seguridad policiaca del Estado en su pretensión de hacer confesar "la verdad" a los cautivos.

En reacción, la Comisión no gubernamental de Derechos

Humanos de El Salvador (CDHES) envió a la abogada Alicia Sánchez Umaña el 9 de febrero pasado, para consignar el estado físico y mental del detenido y gestionar su libertad ante el gobierno hondureño.

La enviada de la CDHES fue recibida en Tegucigalpa y acompañada por miembros de nuestro Comité hasta la sureña ciudad de Choluteca, donde se confirmó además la reclusión de una mujer salvadoreña detenida allí aparentemente por indocumentada.

En ambos casos de detención fueron confirmadas huellas de las torturas aplicadas durante el cautiverio en celdas policíacas de la Fuerza de Seguridad Pública y de la Policía de Migración: José Arnulfo tiene huellas de "la capucha" y la mujer, quemaduras en sus brazos.

Las huellas de la tortura psicológica no se ven, pero se advierten.

El Cofadeh quedó comprometido a verificar periódicamente la situación de los detenidos y el curso de sus juicios, que no se incluyen en la última amnistía "amplia e incondicional" decretada el 10 de julio de 1991. La primera visita personal la hicimos el 27 de febrero y estamos planificando la segunda.

Sobre este tema, la organización Intercambio de Abogados para la Justicia (LEX) envió el 25 de febrero un fax urgente al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, abogado Orlando Lozano Martínez, en el cual le solicitan garantías de seguridad física y psicológica para los detenidos salvadoreños en Choluteca, así como el ejercicio de su derecho al debido proceso.

LA OEA LLAMA LA ATENCION A HONDURAS

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CID/OEA) en una declaración oficial criticó la falta de atención que el gobierno hondureño ha demostrado para cumplir las diversas recomendaciones hechas para resolver problemas de derechos humanos.

La OEA salió al paso del optimismo oficial del actual gobierno que retomó del informe de las Naciones Unidas sobre derechos humanos sólo lo relativo a las desapariciones y a los demás puntos que le convenían.

En un comunicado dice el gobierno de Honduras que "ya no hay desaparecidos, lo que pone de manifiesto la política del gobierno en promocionar el respeto por los derechos humanos".

Frente a esa declaración, la OEA recuerda al gobierno de Rafael Callejas que hay muchas recomendaciones, por no decir todas las recomendaciones, incumplidas.

Tanto Amnistía Internacional como America's Watch, así como el Departamento de Estado (en parte) y los organismos hondureños de derechos humanos, hemos señalado las violaciones sistemáticas de los derechos humanos civiles y políticos; sociales, económicos y culturales, y no digamos la paz, el desarrollo y el medio ambiente, por el actual gobierno nacionalista de Honduras.



El optimismo del presidente de la República debería ser cambiado por una visión realista de la situación de derechos humanos.

En la Memoria de una

Rosa Francisca Suazo es una mujer que cree en cualquier cosa, con tal que sea una posibilidad para encontrar lo que ama. Tiene tres años de ser la madre del último desaparecido permanente en Honduras, el número 143 según los registros nuestros.

En el estatal Hospital Escuela, donde trabaja como auxiliar de laboratorio junto a su nuera viuda, y aquí en nuestro Comité, la conocemos como "doña Rosa", simplemente. Es una doña tremenda, hace reír a mediomundo con su buen humor.

A pesar del tamaño de su dolor lleva siempre un chiste oportuno, una expresión popular inesperada; es una narradora. Sin duda por eso sabe contar su historia, la historia de la desaparición de su hijo José Leonel Suazo Castillo:

"Todo comenzó el 27 de enero de 1989, cuando mi muchacho departía en el bar **Sofy** del barrio Guanacaste de Tegucigalpa, hasta donde llegó como emisario del mal el capitán de policía Luis Abed Espinal.

La noche transcurrió tranquilamente hasta las 3:00 de la madrugada del 28 de enero, hora en la cual el capitán Espinal se aproximó a pedirle una cerveza a José Leonel. Mi hijo se la negó.

¡Para qué más ofensa a un animal!, se lanzó con todo contra el muchacho. Pero no contaba con que mi hijo es fuerte, ágil y sabe defenderse. Respondió a la agresión a puño limpio; lo derrotó. Así firmó su sentencia, allí comenzó su desaparición.

Aquel día regresó a la casa en la colonia Hato de Enmedio a las 5:00 de la mañana. Al entrar me advirtió que si algo le pasaba, el responsable sería el capitán Espinal.

Entonces comenzó también mi calvario.

Al iniciarse las clases en la Escuela Superior del Profesorado "Francisco Morazán" el 29 de enero de aquel año, José Leonel se presentó al centro educativo donde cursaba la carrera de Educación Física. En solo la entrada sus compañeros le comunicaron que unos militares lo andaban buscando.

Desde entonces procuró andar siempre listo, acompañado a toda hora y sin excederse en sus horarios, pero el secuestro llegó de todos modos.

El 2 de febrero al salir de su trabajo en el Registro Nacional de las Personas (RNP), en el Centro de Tegucigalpa, fue perseguido varias cuadas por hombres armados a bordo de una camioneta sin placas y con vidrios polarizados. Cuando iba a inmediaciones del instituto Hibueras de Comayagüela fue alcanzado e introducido violentamente al vehículo.

El secuestro fue presenciado por su compañera de trabajo Dora Velázquez y por un supervisor de periódicos que pasaba por el lugar. Eran pasadas las 8:00 de la noche.

Cuatro días después me di cuenta que mi hijo había sido capturado por agentes especiales de la Fuerza de Seguridad Pública (FSP), que obedecieron órdenes del coronel Leonel Aquiles Riera Lunati y éste del comandante general de ese cuerpo, Lázaro Melanio Avila Soleno.

La información anterior me la reveló la propia auditora del RNP, la licenciada Daysi Hum. Luego, el inspector general de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), José Briceño, me confió que la operación secuestro fue ejecutada por el capitán Julio

Madre vive la Historia



Rosa Francisca Suazo en entrevista con el periodista Renato Alvarez, frente a la ex-casa presidencial durante una protesta en el centro de Tegucigalpa.

César Uclés, traído desde Santa Rosa de Copán para tal acción terrorista.

!Qué fue lo que no hice en los primeros tres meses de desaparición de mi hijo!: denuncias a los periodistas, más de cuatro peticiones de exhibición personal, visitas a unidades y jefes militares, imploraciones religiosas, solicitudes de adivinación, en fin...todo para nada.

Habían transcurrido ya más de tres meses cuando me fui a la séptima Región de la Fuerza de Seguridad Pública, pues averigüé

por medio de Briceño que allí estaba detenido José Leonel. Cuando llegué a un portón por la parte de atrás de la instalación !cuál fue mi sorpresa!, allí miraba a mi hijo que estaba siendo introducido a un carro Jeep oscuro. Me turbé, tuve miedo gritar. Se lo llevaron. Fue la última vez que lo vi..."

De más está decir que el llanto enjuó el final de esta historia de dolor, que no concluye aún.

Rechazan Informe porque Reproduce

VERSION OFICIAL

La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) rechazó el contenido del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante 1991, por considerarlo inexacto y tendencioso.

Rafael Alegría, miembro de la directiva nacional de la CNTC, explicó a "desaparecidos" que es falso que haya pugnas internas entre los campesinos afiliados a esa organización, como insinúa el informe aludido publicado aquí a mediados de enero de 1992.

"Lamentamos que dicho informe recoja únicamente las versiones de la policía y en base a ellas haga insinuaciones, cuya tendencia es encubrir la responsabilidad militar en asesinatos de compañeros nuestros y desprestigiar por ende nuestra organización".

El informe norteamericano considera a la CNTC una organización marxista en la que pudo ser posible el asesinato a principios de diciembre del año pasado de su dirigente regional, Manuel de Jesús Guerra, por diferencias político-ideológicas radicales con otros compañeros suyos.

"No puede ser marxista una organización donde la mayoría de sus afiliados pertenecen al conservador Partido Nacional y a la tradicional Iglesia Católica", sostuvo Alegría.

Explicó que "está plenamente probado que fueron cuatro agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) quienes planificaron y ejecutaron el asesinato de Guerra, en un momento que nuestra organización ejecutaba acciones de solidaridad

con el STENEE en la zona noroccidental".

Interpretó el dirigente que el propósito del informe es encubrir a los verdaderos responsables y evitar con ello que se abran juicios en su contra.

En el informe, que cita datos recabados por la Embajada Americana en Tegucigalpa, también se hace referencia a dos asesinatos de dirigentes campesinos más, siempre de la CNTC: Moisés Castillo López y Marco Mejía Reyes.

Para Rafael Alegría lo que el informe describe como una caída de Moisés Castillo del vehículo policial por estado de ebriedad, "no es más que un asesinato, pues fue lanzado intencionalmente por los agentes de la Fuerza de Seguridad Pública cuando se aproximaba una rastra".

Los agentes Acosta y Barrera fueron identificados como los sujetos que torturaron a Castillo López el 19 de febrero y que horas después lo arrojaron bajo las llantas de una rastra.

El dirigente regional Marco Mejía Reyes fue asesinado el 29 de febrero por órdenes de terratenientes en Santa Bárbara, que lo hostigaban y amenazaban de muerte.

"Todas estas muertes son atribuibles a las fuerzas policiales y militares aliadas con los terratenientes que ven en nosotros una fuerza opositora al régimen, por defender los intereses de los campesinos", denunció Alegría.

Por su parte, la presidenta de este Comité, Liduvina Hernández, también rechazó en el informe del Departamento de Estado la información relativa al asesinato



Rafael Alegría, miembro de la Directiva Central de la CNTC.

político de su hijo Marco Tulio López Hernández.

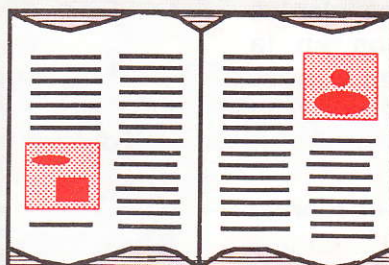
Dice el informe que López Hernández fue ejecutado por un miembro de una organización izquierdista a la que pertenecía la víctima, y que no existe información que implique en el hecho a las Fuerzas Armadas de Honduras.

Liduvina Hernández respondió que en este país, siempre que hay participación policial o militar en los asesinatos, se apresuran a afirmar lo que hoy afirman en relación a mi hijo. Para nosotros lo mató un policía, si los izquierdistas o el gobierno están creyendo lo contrario, que se apresuren a demostrármelo.

No obstante las objeciones citadas, la Comisión no gubernamental de Derechos Humanos de Honduras (CODEH) consideró el informe como la "primera coincidencia histórica con el Departamento de Estado de los Estados Unidos"

La Experiencia con AHPROCAFE

El Cofadeh fue invitado a exponer los fundamentos legales, históricos y filosóficos de los derechos humanos, así como una experiencia sobre la aplicación del recurso de Habeas Corpus y un repaso de la realidad nacional.



Leonel expuso los fundamentos teóricos de los derechos humanos y Nohemy compartió su testimonio en la búsqueda de su hermano Samuel Pérez Borjas, hecho ocurrido en 1982.

La invitación fue hecha por la Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE) con fecha 20 de febrero. Fue atendida por los compañeros Leonel Casco y Nohemy Pérez.

La actividad tuvo lugar de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, como parte del Tercer Seminario de Capacitación para Educadores de AHPROCAFE. Participaron 37 promotores de dicha asociación.

Al final de la jornada el Comité obsequió una Constitución de la República a cada uno de los participantes (edición de bolsillo), boletines "desaparecidos" y otros documentos de interés.

Haciendo Tareas en COFADEH

Casi a diario recibimos en nuestro Centro de Documentación decenas de estudiantes de secundaria y de nivel superior que solicitan información sobre la

situación de los derechos humanos en el país, específicamente sobre las desapariciones forzadas y sus efectos.

Entre los institutos que han enviado a sus alumnos a investigar el tema, mencionamos: Instituto Gustavo Adolfo, Alfonso Guillén Zelaya, Alpha, Paulino Valladares. Aquí resuelven sus tareas.

Los universitarios también solicitan a menudo información para sus clases de Sociología, Filosofía, Ciencias Políticas y materias de Derecho. Mery Agurcia les atiende gentilmente.

El respeto al derecho ajeno, es la Paz.

Benito Juárez.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

Los jóvenes de Intercambio Cultural Internacional (AICYE) solicitaron a nuestro Comité un taller sobre "los derechos humanos en Honduras y la seguridad del Estado", para el 1 de febrero en Tegucigalpa.

En el taller participaron jóvenes de Estados Unidos, Canadá y Europa: 33 en total.

Los propósitos eran exponer la situación de los derechos humanos en Honduras, la posición del gobierno, el concepto de la seguridad nacional, la razón de existir del Cofadeh y sus perspectivas.

Leonel Casco Gutiérrez, nuestro compañero, fue el expositor.

Cada esfuerzo de este tipo es una ventana abierta a la verdad, es lo que podemos concluir.

COBARDES QUIENES UTILIZAN EL TEMA DE LOS DESAPARECIDOS

El gobierno actual es cobarde al no señalar los nombres de militares implicados en la desaparición de personas y todavía más cobardes son aquellos políticos que utilizan el tema con fines electoreros.

El señalamiento anterior lo hizo el 27 de febrero el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, en una declaración periodística que recoge un diario de la capital.

Para conocer personalmente su criterio, la redacción de "desaparecidos" fue hasta su bufete en Tegucigalpa y allí el profesional reiteró su criterio. Son cobardes quienes hablan de los desaparecidos, pero que no dicen nada de los militares responsables.

Mauricio Villeda es el fundador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y exmiembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Honduras. En su doble condición intentó llevar la denuncia a casa de los implicados.

"En mi tiempo, recuerdo, la cúpula de militares hondureños solamente nos permitió dos entrevistas con ellos, durante las cuales les expusimos nuestra información sobre los desaparecidos. En ambas oportunidades, su justificación fue la misma: ninguno de nuestros miembros tiene implicación alguna".

Sostiene el abogado Villeda que la desaparición es un crimen muy grande, por lo que no debe quedar impune en ninguna parte donde se le cometa.

Propone que "el Estado de Honduras nombre una comisión investigadora que identifique los nombres y los paraderos de los responsables, que son muchos y que están en todas partes.



El presidente de la República asciende a General de División a Luis Alonso Discua Elvir. Ambos saben de los desaparecidos.

Explica que una forma sería que el juzgado respectivo pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una copia del juicio ventilado sobre las desapariciones de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez, en el cual hay muchos nombres de implicados".

SUSCRIPCION (anual)

Honduras	L. 30.00
América Latina	\$ 15.00
Europa	\$ 30.00
Estados Unidos	\$ 25.00

Suscribase

DIRECCION
Apartado Postal 1243
Teléfono 37-9800
FAX 37-9800